



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE: 933/2022

“RODRIGUEZ FABIAN c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

FABIAN RODRIGUEZ impugna la Resolución Administrativa 2144-E-2021 que al rechazar un anterior pedido de revisión, confirmó el reclamo de una deuda de \$ 6.730.220,46 (comprensivo de \$3.384.272,20 en concepto de capital, y \$ 3.345.948,26 por intereses quedando suspendida la aplicación de la multa a las resultas del resultado de la causa penal en trámite) por personal no declarado, durante el periodo fiscal 01/2011 a 12/2013, reclamo que se habría originado en una presentación efectuada por la obra social de Peones de Taxis ante la unidad fiscal de investigaciones de la Seguridad Social con base en una presunta maniobra mediante la cual el titular de autos, habría evadido el pago de aportes y contribuciones recurriendo a la formación de 44 sociedades bajo el formato de sociedad de responsabilidad limitada encubriendo, a juicio del organismo, verdaderas relaciones de trabajo dependiente.

El apelante rechaza la pretensión de AFIP por considerarla equivocada y arbitraria. Relata que integra algunas sociedades que tiene como mínimo una licencia de taxi y un vehículo y que, las personas por las cuales se le reclaman aportes y contribuciones de Seguridad Social, no son sus dependientes sino que se trata de sus socios.

Afirma que jamás tuvo personal dependiente bajo sus órdenes. Por otra parte solicita se la exima del cumplimiento al requisito impuesto por el art. 15 de la ley 18.820 pues sostiene que es lesivo de normas constitucionales tales como los arts. 17, 18 y 75 inciso 22 (en tanto recepta el Pacto de San José de Costa Rica que en su art. 8º establece la derogación del principio “solve et repete”). Explica que, además, le es imposible dar cumplimiento a tal imposición legal por no contar con recursos económicos suficientes, por lo que peticiona se lo exima del cumplimiento de tal requisito. Argumenta que la denegatoria a tal pedido conculcaría la garantía de revisión judicial configurando una ilegítima privación de justicia.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

En nuestro derecho positivo la regla solve et repete ha sido considerada congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la C.N. y 8° del Pacto de San José de Costa Rica. No obstante, dicho imperativo legal fue morigerado por el Superior Tribunal de la Nación en aquellos casos en que existe una manifiesta desproporción entre la suma que el contribuyente debe ingresar y su concreta capacidad económica o estado patrimonial, así como también ante la falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para hacer frente a dicho imposición (CSJN Fallos 247:181; 250:208; 215:225; 219:668; 256:101; 285:302; 287:101; 307:1753), pero ninguno de estos supuestos resulta configurado en autos.

Estas excepciones deben ser aplicadas cuidadosamente en atención a los principios de igualdad ante la ley y de justicia distributiva que enmarcan el análisis de la presente cuestión. Las salvedades al principio general que contempla el art. 15 de la ley 18.820, que explicita la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revisten un carácter excepcional y es menester para demostrarlas la existencia de una prueba fehaciente (CFSS Sala III sent. del 11/03/2020 “Cravero Raúl y Cravero Carlos SH c/AFIP s/Impugnación de deuda”).

En el caso que nos ocupa el apelante se limitó a ofrecer se designe perito contador pero sin acompañar a la causa estudio contable o informe pericial que exprese de manera minuciosa y detallada la situación patrimonial y financiera demostrativa de la imposibilidad económica invocada que le impidió dar cumplimiento a la manda legal sin comprometer seriamente el normal desarrollo de sus actividades (conf. art. 377 CPCCN). Expresa únicamente que el profesional, por ella ofrecido, debería pronunciarse sobre si sus libros son llevados en legal forma, indicar si se encuentra en condiciones de afrontar el depósito pretendido, especificar cuáles serían las consecuencias financieras si efectúa tal depósito y si es factible, dado su desempeño económico, obtener un crédito por la suma reclamada (ver escrito de impugnación).

Tampoco se acompañó un seguro de caución que le hubiera permitido demostrar su intención de cumplir con la normativa vigente, más aún teniendo presente que el referido instrumento ha sido considerado sucedáneo válido del requisito impuesto por la norma al garantizar suficientemente el interés fiscal (CSJN sent. del 04/11/2008 “Orígenes AFJP S.A. c/AFIP-DGI” Fallos 331:2480).

Ahora bien reiteradamente se ha expresado que resulta improcedente el mero ofrecimiento de una pericial contable sin aportar ningún elemento probatorio conjuntamente con la apelación, de manera que permita determinar de manera indubitable la imposibilidad económica de efectuar el depósito previo que se alega (conf. crit. esta Sala sent. del 23/04/2021 “Megatom S.A. c/AFIP





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

s/Impugnación de de Deuda”; ídem. Sent. del 23/04/2021 “Benaglia, Leonor Susana c/AFIP s/Impugnación de deuda”; en idéntico sentido Sala I sent. del 28/12/15 “Altos de Uspallata S.A. c/Fisco Nacional-AFIP s/Impugnación de deuda”; ídem. Sala I sent. Del 28/05/21 “Workjet S.A. c/AFIP s/Impugnación de deuda”).

Por último y con relación a los honorarios, tomando en cuenta la labor desarrollada por el letrado, la calidad eficacia e importancia económica del proceso y la facultad concedida por el art. 1255 del Cód. Civ. y Com. de la Nación se regulan los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 6 UMA (\$152.238) y en 4 UMA (\$101.492) los correspondientes al letrado de la parte actora, conf. CSJN. Res. 2722.

En virtud de lo expresado propongo no habilitar la presente instancia e imponer las costas al recurrente (art. 68 PCCN). Regular los honorarios que retribuyen la tarea desarrollada por la representación letrada de la parte demandada en 6 UMA (\$152.238) y en 4 UMA (\$ 101.492) los correspondientes a la dirección letrada de la parte actora, conf. CSJN Res.2722/2023, importes a los que se agregará IVA en caso de corresponder.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto de la Dra. Nora Carmen Dorado.

Por todo lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1º) No habilitar la instancia judicial (art. 14 de la ley 18.820), 2º) Imponer las costas al recurrente (art. 68 PCCN), 3º) Fijar los honorarios de la representación letrada de la parte demandada en 6 UMA (\$152.238) y en 4 UMA (\$ 101.492) los correspondientes a la de la parte actora, conf. CSJN Res.2722/2023. A dichos importes se agregará IVA en caso de corresponder. Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente remítase.

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

